

COMPROMETIDOS CON LA VIDA



MANIFIESTO DEL COLEGIO DE BIÓLOGOS DEL AUSTRO DEL ECUADOR (CBA)

**SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA Y SUS RIESGOS** 

Cuenca, julio de 2025



Desde nuestra formación rigurosa, técnica, científica y ética como biólogos —profesionales dedicados al conocimiento profundo, estudio y resguardo de la vida en todas sus formas— el Colegio de Biólogos del Austro del Ecuador (CBA) se pronuncia de manera firme y categórica frente a la expansión de la actividad minera en el país, especialmente en territorios de alta biodiversidad y relevancia hídrica, agrícola, ancestral y ecológica.

Nuestro compromiso irrenunciable es con la vida, con la naturaleza, con el bienestar de las comunidades y con la defensa de los derechos de las generaciones presentes y futuras. En ese sentido, rechazamos con contundencia el modelo extractivista que impone la minería como supuesto eje de desarrollo, cuando la evidencia —tanto a nivel nacional como internacional— ha demostrado que esta actividad conlleva graves consecuencias: conflictos sociales. ambiental, pérdida de biodiversidad, agotamiento de fuentes hídricas y deterioro progresivo de la calidad de vida.

El CBA, como gremio profesional responsable y comprometido con la biodiversidad y los derechos de la naturaleza, expresa públicamente su profunda preocupación y emite una alerta técnica frente al avance acelerado, inconsulto y muchas veces ilegal de actividades mineras en las provincias de Azuay, Loja, Morona Santiago y Cañar. Particularmente alarmante es la intervención en zonas de altísima sensibilidad ecológica como páramos, bosques montanos, nacimientos de agua y áreas protegidas, donde los impactos ya sonevidentes, severos y en muchos casos irreversibles.

Reafirmamos que no puede haber desarrollo verdadero si este se construye a costa de la destrucción de los ecosistemas que sostienen la vida.



# 1. Principios que orientan nuestro pronunciamiento: sustento legal, ético y científico

Nuestra posición se fundamenta en principios y normas constitucionales, éticas y científicas que respaldan la defensa de la vida, la naturaleza y los derechos colectivos. Entre ellos destacamos:

El principio de **precaución** 

Consagrado en los artículos 396 y 73 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, en caso de duda sobre los efectos ambientales de una actividad, debe prevalecer la protección de los ecosistemas, evitando acciones que puedan causar daño irreversible.

El principio de **prevención** 

Obliga a detener la minería frente a la certeza científica de sus impactos. En ecosistemas sensibles, permitirla constituye una violación a este principio, al no evitar un daño ambiental conocido. Este mandato está recogido en el artículo 396, numeral 1 de la Constitución.

El derecho a la resistencia

(Art. 98), que ampara a personas y colectivos a oponerse a acciones u omisiones —tanto del poder público como de actores privados— que vulneren derechos constitucionales. Este derecho se complementa con el artículo 396, que obliga a todas las personas a prevenir y denunciar daños ambientales, y con el artículo 95, que garantiza la participación ciudadana en decisiones que afectan al interés público, en especial al entorno natural y a la vida misma.

El principio **In Dubio Pro Natura** 

Obliga a optar por la alternativa más favorable para la naturaleza en casos de incertidumbre científica sobre impactos ambientales, reafirma la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad frente a actividades de alto riesgo ecológico.

Reconocimiento de los **derechos de la naturaleza** 

Consagrado en los **artículos 10, 71 y 72,** establece que **la naturaleza es sujeto de derechos, por lo tanto, debe ser respetada, protegida y restaurada.** Esta visión supera la concepción instrumental del entorno natural y reconoce su valor intrínseco y su dignidad propia.

Derecho a vivir en un ambiente sano

El **artículo 14** de la Constitución reconoce el derecho de la población **a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el Buen Vivir (Sumak Kawsay**). Este derecho incluye el acceso a la información, a la participación en políticas ambientales y a la conservación de la naturaleza. La minería, al generar impactos severos sobre los ecosistemas, las fuentes hídricas y la salud colectiva, atenta directamente contra este derecho fundamental y deteriora las condiciones de vida digna, especialmente en comunidades rurales, campesinas e indígenas.



Derecho humano **al agua**  Reconocido en el **artículo 12** de la Constitución, **establece que el acceso al agua es fundamental e irrenunciable, y que este recurso constituye un patrimonio nacional estratégico de uso público.** La contaminación, desvío o agotamiento de fuentes hídricas debido a actividades mineras vulnera directamente este derecho esencial para la vida.

Derecho a actuar ante amenazas ambientales Asimismo, rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta socioambiental, pues constituye una grave violación a los derechos humanos, y contraviene principios fundamentales del **Código Orgánico del Ambiente** (COA), como los de prevención, precaución, corresponsabilidad y participación. El COA, en sus **artículos 5 y 6**, reconoce el deber y el derecho de la ciudadanía a actuar ante amenazas ambientales, y exige que los procesos de toma de decisiones sean inclusivos, informados y transparentes.

Derecho a la consulta previa libre e informada En el Ecuador, la implementación de actividades mineras en territorios indígenas ha vulnerado de forma sistemática el derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en el **artículo** 57.7 de la Constitución. Lejos de garantizar procesos auténticos, el Estado ha promovido concesiones sin obtener consentimiento, sin proporcionar información clara ni culturalmente adecuada, lo que constituye una grave violación a los derechos colectivos y a la autodeterminación de los pueblos. Esta omisión deslegitima los proyectos extractivos y contradice los principios del Estado plurinacional y del Buen Vivir.

En este contexto, alertamos que la judicialización, persecución y estigmatización de líderes comunitarios, defensores del agua y colectivos ambientalistas no solo es una injusticia, sino que representa un atentado contra la democracia ecológica, el pluralismo de saberes y la soberanía territorial de los pueblos.



Exigimos al Estado ecuatoriano garantizar el pleno respeto a los derechos constitucionales de las comunidades, así como el cese inmediato de todo acto de intimidación, represión o violencia hacia quienes defienden la vida, el agua y la naturaleza.



# 2. Impactos ambientales y sociales comprobados

La minería, sin importar su escala, ha sido responsable de:

La **pérdida irreversible de ecosistemas estratégicos**, incluidos páramos, bosques montanos y fuentes hídricas, que son vitales para el equilibrio ecológico y el abastecimiento de agua potable para ciudades como Cuenca.

La **alteración profunda de los suelos**, afectando su fertilidad y capacidad de sostener agricultura y vida silvestre.

La contaminación de cuerpos de agua con metales pesados y sedimentos, comprometiendo la salud humana y los ecosistemas acuáticos.

La **fragmentación del territorio**, que afecta la conectividad ecológica y la viabilidad genética de muchas especies.

El **aumento de conflictos sociales**, violaciones de derechos colectivos, desplazamiento de comunidades y afectaciones al tejido social y cultural de los territorios.

### 3. Insuficiencia técnica y falta de rigurosidad

Desde una mirada técnica y científica, los estudios presentados por muchas empresas mineras carecen de profundidad y rigor. La información sobre suelos, aguas subterráneas, biodiversidad y dinámica ecosistémica es escasa, mal fundamentada o deliberadamente subestimada. Se omite información clave o se presentan resultados sin sustento verificable.

Por tanto, exigimos que se aplique **el Principio de Precaució**n de forma inmediata y vinculante ante la posibilidad de daño ambiental irreversible.

### 4. La minería no es desarrollo: es retroceso

Los supuestos beneficios económicos de la minería no compensan los daños ambientales y sociales que genera. La destrucción de servicios ecosistémicos como el agua, el suelo fértil, la polinización, la regulación climática y la biodiversidad es un alto costo que terminarán pagando las futuras generaciones. No existe justicia ambiental posible sin justicia social, y la minería está demostrando ser un modelo de exclusión, saqueo y deterioro.

Incluso desde una perspectiva económica, el modelo minero ha demostrado generar dependencia externa, fluctuaciones fiscales y concentración de la riqueza en manos de pocos actores, la supuesta "bonanza" minera raramente se traduce en mejoras estructurales para las comunidades locales, por el contrario, deja pasivos ambientales costosos, pérdida de vocaciones productivas sostenibles como la agroecología o el ecoturismo, y fragmentación social.



# 5. Nuestra propuesta: **desarrollo en armonía con la naturaleza**

El Colegio de Biólogos del Austro del Ecuador (CBA) no solo denuncia los impactos de la minería, sino que propone alternativas viables, sostenibles y equitativas, fundamentadas en el conocimiento técnico, la planificación territorial y el respeto a los derechos de la naturaleza y de las comunidades.

#### Planteamos:



Fomentar la conservación de la biodiversidad como eje central del bienestar presente y de la sostenibilidad intergeneracional. La vida en todas sus formas constituye el soporte fundamental de los sistemas ecológicos, culturales y económicos.



Impulsar un desarrollo local verdaderamente sustentable, que se base en el aprovechamiento responsable, regenerativo y solidario de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas, sin comprometer su integridad ni su capacidad de sostener la vida.



Promover la investigación científica, la educación ambiental y la participación ciudadana activa en la toma de decisiones sobre el territorio, como condiciones indispensables para una gobernanza democrática, informada y ética.



**Priorizar la prevención sobre la remediación,** ya que está ampliamente documentado que prevenir la degradación de los ecosistemas es más eficaz, menos costoso y más justo que intentar restaurarlos una vez destruidos.



Defender los servicios ecosistémicos no es una postura ideológica, sino una obligación ética, científica y jurídica, especialmente ante la emergencia climática, la pérdida acelerada de biodiversidad y las amenazas crecientes al derecho humano al agua, a un ambiente sano y a la vida misma.



## 6. Exigencias y postura institucional

Rechazamos la imposición forzada, inconsulta e ilegal de actividades mineras en territorios con alto valor ambiental, cultural o social.

Exigimos que se detenga cualquier intento de concesión minera en páramos, zonas hídricas o áreas protegidas, en virtud de la normativa nacional e internacional.

Reiteramos que toda forma de minería en los páramos es ilegal y constituye una amenaza directa a la soberanía hídrica, alimentaria y comunitaria del país.

**Demandamos respeto** a las comunidades locales, pueblos indígenas, campesinos y ciudadanos que ejercen su derecho a defender la vida y el territorio.

El CBA se declara firme defensor de la vida, de la biodiversidad, del agua y del derecho de los pueblos a un ambiente sano. Nos comprometemos a seguir trabajando con responsabilidad, técnica y ética en la vigilancia, denuncia y documentación de las afectaciones derivadas de la minería.

Hoy más que nunca, es hora de escuchar a la naturaleza.

¡Sin biodiversidad, no hay futuro!

¡Sin agua, no hay vida!

¡La vida vale más que el oro!